Repercusiones de una gestión financiera

TRIBUNA LIBRE

El respeto a Pujol y la querella contra Banca Catalana

JORDI SOLÉ TURA

El autor, que compartió con Pujol la lucha contra el franquismo y por la autonomía, expresa su respeto personal hacia el actual presidente de la Generalitat pero discrepa de su idea de que la presentación de la querella sobre Banca Catalana sea un ataque contra todos los catalanes.

Tengo un gran respeto personal y político por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Con él he compartido muchos avatares de la lucha por las libertades y por la autonomía de Cataluña. He estado de acuerdo con él en unas cosas y en descuerdo en otras, pero nunca he dudado de su profundo sentimiento de catalanidad ni tampoco de su compromiso con la democracia.

Precisamente por ésto, creo que tengo ahora el deber, como ciudadano, de decir que estoy en absoluto desacuerdo con él cuando proclama que la presentación de una querella contra los antiguos dirigentes de Banca Catalana es un ataque contra todos los catalanes. Me considero tan catalán como él y no me siento atacado.

Me siento, eso sí, profundamente inquieto y alarmado por lo que está ocurriendo. Yo no sé si los dirigentes del PSOE han pensado o no en utilizar la querella como una especie de revancha política después de las elecciones autonómicas de Cataluña. No tengo ningún elemento para afirmarlo. Lo que sí es cierto es que en la campaña electoral algunos dirigentes socialistas —y muy especialmente el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra— utilizaron el tema de Banca Catalana con tanto desparpajo y tan poca sensibilidad hacia la realidad de Cataluña que abrieron la vía a toda clase de suposiciones maliciosas para lo que pudiese pasar después. Si hoy en Cataluña muchísimas personas —no sólo entre los votantes de CiU— se dejan convencer tan fácilmente de que la presentación de la querella es una revancha política del PSOE es, en gran parte, porque los dirigentes socialistas hicieron factible esta interpretación a lo largo de la campaña electoral.

Se discute ahora sobre la oportunidad de la querella. Es posible que éste no sea precisamente un momento oportuno, pero no se trata sólo de un problema de oportunidad. Este asunto tenía que haberse planteado y resuelto hace ya tiempo y si ha estado arrastrándose tanto ha sido por razones fundamentalmente políticas. Para decirlo con claridad: no se planteó en anteriores legislaturas porque UCD necesitaba los votos de CiU en Madrid y CiU necesitaba los votos de UCD en Barcelona. Y el Gobierno del PSOE, agarrotado por una política autonómica carente de rumbo, de claridad y de valentía, ha dejado pudrir la cuestión de la peor manera, amangado sin dar, repartiendo puyazos, lanzando insinuaciones hirientes, pero eludiendo las posturas claras cuando había que tomarlas, como ocurrió en el propio Parlamento de Cataluña, donde sólo el PSUC planteó claramente la cuestión. También han jugado aquí algunos equívocos electorales. Por eso denunciar la inoportunidad política de la querella es caer en lo mismo que se pretende denunciar, es decir: aducir una razón política contra una acción judicial. En vez de discurrir sobre la oportunidad de la querella todos deberíamos alabar el profundo sentido del deber que han mostrado los funcionarios del Ministerio Fiscal que la han promovido. Es posible que la querella naufrague ahora en el mar de los requisitos formales, pues existe todavía una enorme inadecuación entre lo que establece la Constitución y la realidad orgánica de nuestro Poder Judicial. Pero, para mí éste es un gran paso adelante en la afirmación del Poder Judicial como un sistema de justicia independiente.

Con la excepción del Rey, todos estamos sujetos a las responsabilidades legales que deriven de nuestra actuación como ciudadanos. Pretender, como ha hecho el propio presidente Pujol, que con la querella se quiere escamotear la victoria política de CiU equivale a afirmar que una victoria electoral debe eximir de toda responsabilidad penal o civil a los que ganen.

El primer interesado

Personalmente, deseo que el presidente Pujol salga libre de toda responsabilidad, por él y por el prestigio de la Generalitat. Pero precisamente por ésto él debería ser el primer interesado en despejar todas las dudas, haciendo que las cuestiones planteadas se resuelvan con serenidad, sin actitudes plebiscitarias ni explosiones pasionales. En definitiva, la autonomía de Cataluña forma parte de un sistema global en el que todas las instituciones del Estado deben fortalecerse y gozar de credibilidad. Si cada conflicto político pone en cuestión la esencia misma de las instituciones, al final saldrá perdiendo la democracia en su conjunto.

Todo ésto me parece esencial. Pero quizá lo más preocupante es el fondo político de esa gran conmoción en Cataluña. Hay que decir claramente que la presentación de la querella ha sido instrumentalizada por los dirigentes de CiU. Mientras Jordi Pujol se dirige a los votantes catalanes hablando de "ofensa contra toda Cataluña", Miquel Roca explica en Madrid que los socialistas no saben perder, con la vista puesta en su operación reformista. Está claro que en Cataluña el asunto de la querella se quiere utilizar para unificar todo el nacionalismo catalán en torno a la figura de Jordi Pujol con mecanismos plebiscitarios, complentando así la operación de las elecciones autonómicas.

Cataluña no es sólo un hombre

Pero hay más. Con este planteamiento se pretende también transformar la cuestión nacional en una línea divisoria entre la derecha y la izquierda. Al identificar una querella judicial contra el señor Jordi Pujol, ciudadano de Cataluña y antiguo dirigente de una entidad bancaria, con una ofensa contra Cataluña y un ataque contra su autonomía, se pretende convertir el actual presidente de la Generalitat en la única expresión auténtica de Cataluña, obligando a todos a definirse en relación con ella. De prosperar esta operación política, las fuerzas de izquierda se pueden encontrar ante una alternativa diabólica: o solidarizarse con Jordi Pujol para preservar su sello de catalanidad, o enfrentarse a él y aparecer como la prolongación dentro de Cataluña del adversario exterior, es decir, del centralismo anticatalán.

No es fácil, desde luego, hacer frente con serenidad a una situación como la creada en Cataluña con la presentación de la querella. La reacción emocional de tantos y tantos ciudadanos, las campañas de adhesiones, la explosión de un nacionalismo tan superestructural como se quiera pero cada día más contundente en sus planteamientos, y la utilización pura y simple de todo ésto crea un clima incómodo para la izquierda. Un periódico de Barcelona afín a CiU publicaba hace unos días, con grandes titulares, que para Felipe González "el riesgo principal es el hecho diferencial de Cataluña".

Creo sinceramente que por este camino vamos a la catástrofe. Los errores políticos del Gobierno del PSOE y la instrumentalización por CiU de episodios como los de la querella han permitido reconstruir la idea de un adversario exterior de Cataluña, que se iba diluyendo. Al mismo tiempo, se mina la credibilidad del poder judicial y se introduce un peligroso relativismo en la valoración de las instituciones, según que sus decisiones nos sean favorables o no. Con titulares como el que antes citaba y con planteamientos de este tipo, se está configurando la construcción del Estado de las Autonomías como un proceso de conflicto permanente en el que se están desencadenando demonios que al final nos pueden desbordar a todos.

Las fuerzas de izquierda no pueden aceptar esta situación, no pueden contemplar pasivamente el desarrollo de estas peligrosas maniobras ni pueden dejarse encerrar en este círculo infernal. La gran aportación de la izquierda en Cataluña había consistido en evitar que el hecho nacional se convirtiera en línea divisoria entre la izquierda y la derecha, y no se puede retroceder en ésto. No se trata, desde luego, de que la izquierda sea más nacionalista que nadie. Se trata de que plantee los verdaderos problemas del país y que sepa crear con energía un clima de serenidad para discutirlos, con todas sus implicaciones, no dejándose llevar a terrenos equívocos. Las fuerzas de izquierda deben decir las cosas con claridad, situar a cada uno ante sus responsabilidades, no eludir las propias y no dejarse arrebatar sus más auténticos signos de identidad. Entre ellos, el de su profunda e indiscutible catalanidad.

Jordi Solé Tura, ex diputado comunista, es catedrático de Derecho Político y formó parte de la ponencia que redactó la Constitución.

El Vaticano asegura que no ha tenido responsabilidad en la quiebra del Banco Ambrosiano

JUAN ARIAS. **Roma**

El Vaticano difundió ayer una nota oficial a través del jefe de Prensa del Papa, Romeo Panciroli, señalando que el IOR (Instituto Obras de Religión) no ha tenido responsabilidad alguna en la quiebra del Banco Ambrosiano, en la cual se vio *involuntariamente involucrado*. Señala que si ha aceptado pagar de 250 millones de dólares ha sido sólo como una *ayuda voluntaria* para "facilitar las relaciones internacionales", dentro de un espíritu de "recíproca y libre colaboración".

Por lo que se refiere a las famosas *cartas de patronage*, firmadas en 1971 por el arzobispo Paul Marcinkus al *suicidado* Roberto Calvi, ex presidente del Ambrosiano, la nota afirma que nunca fueron utilizadas por el IOR, y que de ellas el Vaticano no recabó ninguna ventaja ni tampoco contribuyó a provocar daño alguno.

El Vaticano muestra interés en borrar la imagen creada con los entuertos en que monseñor Marcinkus había implicado al mismo Papa. En el documento oficial firmado en Ginebra se recalca que la responsabilidad en todo el asunto ha sido sólo *moral e involuntaria*. Se ha tratado —intenta decir el Vaticano—de una ingenuidad de Marcinkus, quien se dejó engañar por Calvi. En dicho documento se dice también que el IOR cede "el control, pero no la propiedad" de todas las sociedades *sombra* del IOR en los diversos *paraísos fiscales* de América Latina.

Ahora será importante ver, en la reestructuración del IOR que prepara el Papa, qué papel le corresponderá a Marcinkus, y si saldrá completamente rehabilitado, lo que confirmaría que el Vaticano le considera *víctima* y no *culpable*, o bien si será alejado del banco del Papa, lo que reflejaría, según los observadores, que en el fondo el Vaticano juzga su actuación como, por lo menos, *ligera*.

Por lo que se refiere al mundo político y judicial, quedan aún pendientes los *mandatos judiciales* enviados por los magistrados de Milán a monseñor Marcinkus y a sus dos colaboradores seglares, De Strobel y Mennini. Mientras, cuatro diputados democristianos han pedido ya al ministro del Tesoro que explique el acuerdo firmado en Ginebra y que el Gobierno diga si se da por satisfecho con lo desembolsado hasta ahora por el Vaticano.

es cosa de hombres
SOBERANO
GONZALEZ BYASS
SHERRY & BRANDY


Repercusiones de una gestión financiera

Miguel Boyer ratifica que la entidad bancaria ha recibido ayudas por valor de 270.000 millones de pesetas

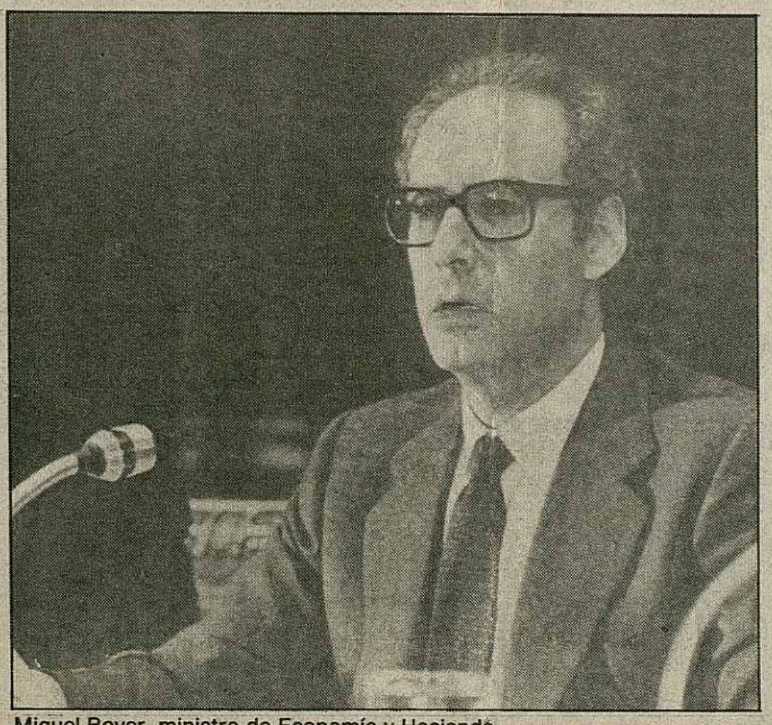
El PSC denuncia que con el tema de Banca Catalana se está desatando en Cataluña una campaña contra la convivencia

Madrid / Barcelona

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) hizo pública ayer una declaración en la que, tras ratificar su "respeto hacia los afectados por la querella de Banca Catalana" y su convicción sobre la "honorabilidad del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol," exige una "aclaración profunda del caso". El PSC afirma que en los últimos días se ha desatado una campaña antisocialista y se ha creado una dinámica de crispación que puede llegar a deteriorar de forma irreversible la convivencia democrática de Cataluña. El ministro de Economia, Miguel Boyer, ratificó ayer las declaraciones de Felipe González en las que éste aseguraba que el Gobierno ha aportado 270.000 millones del erario público en concepto de ayudas a Banca Catalana.

El Partit dels Socialistes de Cataluya recordó ayer que inmediatamente después de la presentación de la querella lamentaron "profundamente" que se hubiera llegado a esta situación, al tiempo que manifiesta su "respeto hacia los querellados, y de manera especial al presidente de la Generalitat". "Con aquella declaración", explican ahora, "quisimos contribuir a mantener un clima de serenidad". Sin embargo, según el PSC, a pesar de las recomendaciones de calma hechas por el propio Jordi Pujol, "otras voces pertenecientes a la actual mayoría han traspasado los límites de una crítica legítima a la presentación de la querella, para emprender, con finalidades partidistas, una ofensiva contra los socialistas que llega hasta las injurias totalmente intolerables, como las que ha proferido el presidente del CDC, señor Trias Fargas". Éste había hecho unas declaraciones afirmando que los socialistas tienen "unas raíces autoritarias más profundas que las de Franco".

Refiriéndose a los hechos contenidos en la querella y a la situación económica de Banca Catalana, los socialistas catalanes se pronuncian por un esclarecimiento del caso y afirman que "es exigible de todos los implicados la máxima y completa información". En este sentido, el PSC considera que la negativa de CDC a la realización de un debate parlamentario en el Congreso de los Diputados, tal como había propuesto el presidente del Gobierno, Felipe González, "es totalmente incoherente, cuando al mismo tiempo se estimulan campañas y manifestaciones en la calle".



Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda.

Debido a la actual situación, el PSC en su nota hace un llamamiento a todos los catalanes para que contribuyan con su actitud a "mantener y reforzar la normalidad y la autoridad de nuestras instituciones políticas". El PSC reitera también su convencimiento de que los ministerios fiscales y el poder judicial "han actuado y actuarán con total independencia, y al servicio de la justicia, para resolver urgentemente el caso".

La declaración que hizo ayer el PSC finaliza solicitando a todas las fuerzas políticas catalanas que se responsabilicen para no crear ni impulsar situaciones sociales que puedan generar "tendencias imprevisibles y peligrosas en contra del pluralismo, el diálogo democrático y el respeto a todas las opiniones".

Por su parte, la Federación Intercomarcal de las comarcas del Penedés y del Garraf del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) acordó ayer expresar su apoyo a la querella del Fiscal General del Estado contra antiguos directivos de Banca Catalana.

La ayuda del Banco de España

El ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, explicó en una conferencia de prensa celebrada en Madrid que Banca Catalana ha sido el grupo que más ayuda recibió del Banco de España en la reciente crisis bancaria, según informa **Fernando Orgambides**. Boyer corroboraba así las declaraciones realizadas el viernes por el propio presidente del Gobierno, Felipe González, quien manifestó que el Gobierno se vió obligado a aportar 270.000 millones del erario público para superar la crisi del grupo.

Dijo el ministro de Economía y Hacienda que solamente el déficit de Banca Catalana, como entidad y no como grupo, oscilaba entre los 60 y 65.000 millones de pesetas, mientras que el total del *agujero* del grupo, compuesto además del primero por el Banco Industrial del Mediterráneo, Banco de Gerona y Banco de Barcelona, ascendía a 139.000 millones.

En este sentido explicó que el Banco de España aportó al grupo un total de 270.000 millones de pesetas, que ha sido la cantidad más alta que ha recibido un banco para su sostenimiento desde que se inició la crisis en 1978.

Estas declaraciones las realizó el ministro de Hacienda al término de un encuentro informativo que sostuvieron ayer algunos representantes del Gobierno, entre ellos los ministros Josquín Almunia y Javier Moscoso, y militantes de base de la Federación Socialista Madrileña (FSM). Boyer, sin embargo, no acudió a la reunión como ministro, sino como militante de base, por lo que no realizó ninguna intervención pública, a excepción de lo aportado en conferencia de Prensa.

En Barcelona aparecen octavillas y pintadas en defensa de Jordi Pujol y con críticas a los líderes del PSOE

Barcelona

La querella contra Jordi Pujol y 24 antiguos directivos de Banca Catalana continúa provocando declaraciones por parte de diversos ayuntamientos y personalidades de la vida publica de Cataluña. Además de estos pronunciamientos, en las calles de Barcelona aparecieron ayer octavillas y pintadas contra el PSOE y los dirigentes socialistas. Los lemas de las octavillas, redactadas en catalán y en castellano, eran, entre otros, "PSOE, Felipe y Guerra, ofenden a nuestra tierra", "Pujol no està sol" ("Pujol no está solo") y "Pujol, Catalunya et vol" ("Cataluña quiere a Pujol").

Los ayuntamientos de diversas localidades de Cataluña han convocado plenos y aprobado mociones de apoyo a Pujol y de repulsa ante la querella presentada contra los antiguos directivos de Banca Catalana. El ayuntamiento de Reus (Tarragona), de mayoría socialista, aprobó por unanimidad una moción en este sentido presentada por el alcalde, Antón Borell, del PSC-PSOE, en la que se recoge el sentimiento del consistorio de la localidad contra la querella. Algún ayuntamiento, como el de Berga (Barcelona), con mayoría de CiU, ha convocado pleno extraodinario para el próximo martes, día 29, con el objeto de dar soporte a Pujol.

Por otra parte, diversos políticos y organizaciones catalanas han tomado postura. Salvador Grau Mora, conocido nacionalista catalán que firmó un manifiesto a favor de Raimon Obiols en las pasadas elecciones, ha expresado su apoyo a Jordi Pujol. Antoni Dalmau, el presidente de la Diputación de Barcelona, señaló ayer, por su parte, que "Jordi Pujol es el presidente de la Generalitat por la elección popular de los catalanes, pero ello nada tiene que ver con su anterior actuación como banquero. Lo que se juzga ahora es aquella etapa anterior".

La organización Crida a la Solidaritat ha hecho público un manifiesto en el que, refiriendose al tema de Catalana, afirma que el Gobierno de Felipe González efectúa comportamientos centristas y agresivos "contrarios a los derechos del pueblo catalán".

Se organiza la manifestación

El Gobierno Civil de Barcelona no había recibido ayer ninguna comunicación anunciando que fuera a celebrarse una concentración ante el Parlament o ante el Palau de la Generalitat el próximo miércoles, ni una manifestación entre una y otra sede, según afirmaron fuentes gubernativas. Estas concentraciones en apoyo de Jordi Pujol se preparan sin que exista una convocatoria formal.

Una de las entidades promotoras, Omnium Cultural, asegura que asistirán a la manifestación gran número de pequeños accionistas de Banca Catalana junto a la militancia de CiU. Fuentes de Convergència han afirmado que el partido "no convoca, pero deja hacer" e, incluso, que ve "con simpatía que se produzca la concentración". Asimismo, los organizadores preveen que muchos ciudadanos acudirán espontáneamente paraexpresar su apoyo a Jordi Pujol.

Según la legislación vigente, las comunicaciones de manifestaciones deben presentarse con 10 días de antelación, aunque se admiten períodos más breves en casos justificados. Las fuentes gubernativas consultadas descartaron, de todas maneras, que se intente impedir la manifestación aunque ésta se produzca sin estar debidamente autorizada.

La vigilancia externa del Parlament, así como la de su interior, corresponde al Cuerpo de Mossos d'Esquadra (policía autonómica). En el interior de la sede de la Cámara, los *mossos* están a las órdenes del presidente del Parlament, quien ya ha remitido un escrito al director general de Seguridad Ciudadana de la Generalitat comunicándole que la dotación de *mossos* debe ajustarse los próximos días 29 y 30 al esperado incremento de público que se prevé que acuda al Parlament.

El Consejo de Ministros analizó unas explicaciones de Pujol en el programa 'La clave'

Madrid

El Consejo de Ministros analizó el miércoles parte del vídeo del programa *La Clave* dedicado a Cataluña que se emitió poco antes de las elecciones autonómicas, y especialmente una respuesta del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ante una pregunta que le formuló Fabián Estapé, catedrático de Economía, sobre Banca Catalana. Algunos miembros del Gabinete subrayaron las frases de Pujol, quien matizó las acusaciones dirigidas contra él pero sin llegar a desmentirlas rotundamente.

El Consejo de Ministros pidió durante su reunión en el palacio de la Moncloa que le fuesen seleccionadas algunas intervenciones, y luego solicitó la transcripción textual de la respuesta de Pujol a la mencionada pregunta de Estapé.

Asimismo, el Gabinete, en su reunión del miércoles, estudió la hipótesis de que Pujol decidiera no presentarse a la investidura como presidente de la Generalitat. Según fuentes gubernamentales, existen algunos indicios de que en Convergència se ha barajado la posibilidad dentro de la estrategia a seguir en el tema. La conversación del Consejo de Ministros se ciñó a la posible actitud ante esa eventual decisión del jefe del Gobierno catalán. En principio, jurídicamente parece viable que Pujol obligue a un estancamiento en el proceso de constitución del nuevo Ejecutivo autónomo, ya que, al parecer, tiene la posibilidad de demorar cuanto desee la investidura. Así, en teoría podría no presentarse a la reelección si antes no queda clara su exculpación en el caso Banca Catalana, y a la vez continuar como presidente en funciones.

El Consejo de Ministros conoció también el informe completo que la Fiscalía General del Estado envió al titular de Justicia sobre la fundamentación de la querella. Según fuentes socialistas, el contenido coincide en sus fundamentos con un amplio texto, de más de 100 folios, que el PSOE comenzó a elaborar hace un año. En dicho partido se produjo un debate interno antes de las elecciones catalanas para analizar si ese informe debía ser utilizado en la campaña y finalmente se decidió no hacerlo.

Carta de Banca Catalana

El director General de Banca Catalana, Alfredo Sáenz, ha dirigido al abogado Joan Piqué, uno de los encargados de la defensa de los querellados, una carta en la que manifiesta que la entidad bancaria no se unirá a la querella contra Jordi Pujol y los 24 antiguos directivos de la entidad. En la carta se afirma que no existe ninguna "deuda, responsabilidad o perjuicio" que pueda ser acreditado por Banca Catalana contra el actual presidente de la Generalitat. El texto señala también que en los libros de la entidad "figura el señor Jaume Carner, antiguo presidente de Banca Catalana, como prestario o deudor por diversas operaciones con nuestra sociedad, por importe en conjunto de 370 millones de pesetas".